



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. limitada
29 de agosto de 2012
Español
Original: inglés

Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre prevención de la corrupción

Tercer período de sesiones

Viena, 27 a 29 de agosto de 2012

Proyecto de informe

I. Introducción

1. En su resolución 3/2, la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción decidió establecer un Grupo de trabajo intergubernamental provisional de composición abierta sobre prevención de la corrupción, de conformidad con el artículo 63, párrafo 7, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y con el artículo 2, párrafo 2, del reglamento de la Conferencia de los Estados Parte, para que prestara asesoramiento y asistiera a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en materia de prevención de la corrupción.

2. La Conferencia decidió que el Grupo de trabajo cumpliera las siguientes funciones:

- a) Prestar asistencia a la Conferencia para desarrollar y acumular conocimientos en la esfera de la prevención de la corrupción;
- b) Facilitar el intercambio entre los Estados de información y experiencia sobre medidas y prácticas preventivas;
- c) Facilitar la reunión, divulgación y promoción de buenas prácticas para la prevención de la corrupción;
- d) Prestar asistencia a la Conferencia para alentar la cooperación entre todos los interesados y sectores de la sociedad con el fin de prevenir la corrupción.

3. En su primera reunión, celebrada del 13 al 15 de diciembre de 2010, el Grupo de trabajo recomendó que cada una de sus futuras reuniones se centrara en un número específico y razonable de temas sustantivos extraídos del capítulo II de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

4. En su segunda reunión, celebrada del 22 al 24 de agosto de 2011, el Grupo de trabajo observó con aprecio que muchos Estados parte habían compartido



información sobre sus iniciativas y buenas prácticas en relación con los temas examinados, a saber: políticas y prácticas de sensibilización, con especial hincapié en los artículos 5, 7, 12 y 13 de la Convención; y el sector público y la prevención de la corrupción: códigos de conducta (artículo 8 de la Convención) e información pública (artículo 10 de la Convención). El Grupo de trabajo solicitó a los Estados parte que siguieran compartiendo con la Secretaría información actualizada sobre iniciativas y buenas prácticas referentes al capítulo II de la Convención, así como, cuando fuera posible, sobre los logros alcanzados, los problemas surgidos, las necesidades de asistencia técnica y las enseñanzas resultantes de la aplicación. Además, pidió a la Secretaría que preparara documentos de antecedentes en que se resumiera esa información. Señaló también que durante sus reuniones debían celebrarse mesas redondas en que participaran expertos de los países que hubieran enviado respuestas por escrito sobre los temas prioritarios en cuestión.

5. El Grupo de trabajo recomendó que en sus futuros períodos de sesiones su labor siguiera centrándose en un número razonable de temas sustantivos concretos que fueran de interés para la aplicación de los artículos del capítulo II de la Convención y reiteró que sería útil para los debates disponer oportunamente de conocimientos especializados sobre esos temas. En sus reuniones futuras el Grupo de trabajo podría centrar su atención en los temas siguientes:

a) La aplicación del artículo 12 de la Convención, incluido el uso de las alianzas entre el sector público y el privado;

b) Los conflictos de intereses, la denuncia de los actos de corrupción y las declaraciones de activos, en particular en el contexto de los artículos 7 a 9 de la Convención.

6. El Grupo de trabajo solicitó a la Secretaría que le informara en su tercera reunión sobre las actividades realizadas en cumplimiento de las recomendaciones formuladas en su dos primeras reuniones.

7. En su resolución 4/3, la Conferencia de los Estados Parte decidió que el Grupo de trabajo prosiguiera su labor de asesoramiento y asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato de prevención de la corrupción. En la misma resolución, la Conferencia decidió también que el Grupo de trabajo celebrara como mínimo dos reuniones antes del quinto período de sesiones de la Conferencia. Se decidió asimismo que en el futuro las reuniones del Grupo de trabajo se rigieran por un plan de trabajo plurianual para el período que restaba hasta 2015, año en que comenzaría el segundo ciclo del Mecanismo de examen de la aplicación.

II. Organización de la reunión

A. Apertura de la reunión

8. El Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre prevención de la corrupción celebró su tercera reunión del 27 al 29 de agosto de 2012 en Viena. Las sesiones fueron presididas por Abdelaâdim Guerrouj (Marruecos), Presidente de la Conferencia de los Estados Parte, Eugenio Curia (Argentina) y Matti Joutsen (Finlandia).

9. Al inaugurar la reunión, el Presidente recordó la resolución 4/3, titulada “Declaración de Marrakech sobre la prevención de la corrupción”, en que la Conferencia destacó la importancia de aplicar los artículos 5 a 14 de la Convención y de desarrollar e intercambiar mejores prácticas para prevenir la corrupción. En su resolución 3/2, la Conferencia había establecido el Grupo de trabajo para que prestara asistencia en el desarrollo y la acumulación de conocimientos, así como para que facilitara el intercambio entre los Estados de información y experiencia en la esfera de la prevención de la corrupción, facilitara la reunión, divulgación y promoción de buenas prácticas al respecto y alentara la cooperación entre todos los interesados y sectores de la sociedad con el fin de prevenir la corrupción. El Presidente observó, además, que la Conferencia había solicitado a la Secretaría que siguiera actuando como un observatorio internacional que se ocupara de reunir la información existente sobre las buenas prácticas en la prevención de la corrupción, organizando de manera racional y difundiendo la información recibida de los Estados parte, así como determinando con ese criterio las buenas prácticas y su posible reproducción.

10. El Secretario de la Conferencia de los Estados Parte hizo notar la importancia de la Convención, instrumento internacional de carácter amplio que contaba en ese momento con 161 Estados parte. Las disposiciones sobre las medidas preventivas eran un elemento fundamental de la Convención. El Secretario señaló que las dos reuniones anteriores del Grupo de trabajo se habían centrado en la contratación pública; la vulnerabilidad a la corrupción en los sectores público y privado; el ajuste de las normas de integridad pública en materia financiera y de otra índole de las organizaciones internacionales a los principios establecidos en la Convención; la cobertura de los medios de información; el logro de la integridad por medio de la juventud; las políticas y prácticas de sensibilización; y los códigos de conducta del sector público y la información pública.

11. La representante de la Secretaría presentó los documentos de la reunión. Esos informes, titulados “Los conflictos de intereses, la denuncia de los actos de corrupción y las declaraciones de activos, en particular en el contexto de los artículos 7 a 9 de la Convención” (CAC/COSP/WG.4/2012/3) y “Aplicación del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incluido el uso de las alianzas entre el sector público y el sector privado” (CAC/COSP/WG.4/2012/2), se basaban en las respuestas recibidas de los Estados Miembros a la solicitud de información formulada por la Secretaría. La representante señaló que dichos informes reflejaban la información recibida al 7 de junio de 2012 de 27 Estados Miembros y que la presentada después de esa fecha se había publicado en el sitio web de la UNODC, junto con la recibida antes. Se refirió también al documento titulado “Informe sobre el estado de la aplicación de la resolución 4/3, titulada “Declaración de Marrakech sobre la prevención de la corrupción” (CAC/COSP/WG.4/2012/4), en que se exponen las medidas adoptadas para aplicar la Declaración de Marrakech y ayudar al Grupo de trabajo a preparar iniciativas eficaces para prevenir la corrupción.

12. Varios oradores lamentaron la falta de participación de las organizaciones no gubernamentales en la labor del Grupo de trabajo, pues consideraron que estas podían contribuir de forma especial al examen de los problemas relativos a la prevención. El Secretario señaló que la Conferencia de los Estados Parte había examinado a fondo la participación de las organizaciones no gubernamentales en las

actividades del Grupo de examen de la aplicación y había adoptado una decisión a ese respecto. Sin embargo, la Conferencia no había abordado el asunto de la participación de esas organizaciones en sus grupos de trabajo. Así pues, por falta de claridad no se había invitado a las organizaciones no gubernamentales a participar en la labor del grupo de trabajo. Varios otros oradores opinaron que las organizaciones no gubernamentales no podían participar en las reuniones de los grupos de trabajo debido al carácter intergubernamental de esos grupos.

B. Aprobación del programa y organización de los trabajos

13. El 27 de agosto el Grupo de trabajo aprobó el programa siguiente:

1. Cuestiones de organización:
 - a) Apertura de la reunión;
 - b) Aprobación del programa y organización de los trabajos.
2. Aplicación de la resolución 4/3 de la Conferencia, titulada “Declaración de Marrakech sobre la prevención de la corrupción”, y de las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo en su reunión de agosto de 2011:
 - a) Buenas prácticas e iniciativas de prevención de la corrupción:
 - i) Debate temático sobre los conflictos de intereses, la denuncia de los actos de corrupción y las declaraciones de activos, en particular en el contexto de los artículos 7 a 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;
 - ii) Debate temático sobre la aplicación del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incluido el uso de las alianzas entre el sector público y el sector privado;
 - b) Otras recomendaciones.
3. Futuras prioridades y establecimiento de un plan de trabajo plurianual.
4. Aprobación del informe.

C. Asistencia

14. En la reunión del Grupo de trabajo estuvieron representados los siguientes Estados parte en la Convención: Afganistán, Angola, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Bélgica, Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Guatemala, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, México, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, Rumania, Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Togo, Turquía, Ucrania, Uganda, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam y Zimbabwe.

15. La Unión Europea, organización regional de integración económica que es parte en la Convención, estuvo representada en la reunión.

16. Los siguientes Estados signatarios de la Convención estuvieron representados por observadores: Alemania, Japón, República Árabe Siria y República Checa.

17. También estuvieron representados los siguientes de Estados observadores: Omán.

18. Palestina, entidad que mantiene una misión permanente de observación ante las Naciones Unidas, estuvo representada.

19. Las siguientes dependencias de la Secretaría, órganos, fondos y programas de las Naciones Unidas, institutos de la red del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas estuvieron representados por observadores: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

20. Las siguientes organizaciones intergubernamentales estuvieron representadas por observadores: Academia Internacional contra la Corrupción, Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias, Consejo de Europa, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

21. La Soberana Orden Militar de Malta, entidad que mantiene una oficina de observación permanente en la Sede, también estuvo representada.

III. Aplicación de la resolución 4/3 de la Conferencia, titulada “Declaración de Marrakech sobre la prevención de la corrupción”, y de las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo en su reunión de agosto de 2011

A. Buenas prácticas e iniciativas de prevención de la corrupción

i) Debate temático sobre los conflictos de intereses, la denuncia de los actos de corrupción y las declaraciones de activos, en particular en el contexto de los artículos 7 a 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

22. El Presidente inició el primer debate sustantivo, en relación con el cual la Secretaría había preparado una nota de antecedentes titulada “Los conflictos de intereses, la denuncia de los actos de corrupción y las declaraciones de activos, en particular en el contexto de los artículos 7 a 9 de la Convención” (CAC/COSP/WG.4/2012/3). La Secretaría hizo notar con aprecio la información recibida de los Estados Miembros que se recopilaba en esa nota. A fin de facilitar el

intercambio de buenas prácticas e iniciativas respecto de la aplicación se invitó al Grupo de trabajo a que examinara la cuestión en dos partes. En primer lugar, se ocuparía de las cuestiones conexas de los conflictos de intereses y las declaraciones de activos, y en segundo del asunto de la denuncia de los actos de corrupción.

23. El representante de la Secretaría inició el debate sustantivo sobre los conflictos de intereses y las declaraciones de activos. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 4, de la Convención, numerosos Estados abordaban los conflictos de intereses mediante la aprobación de normas escritas y, concretamente, códigos de conducta para los funcionarios públicos. Esas normas comprendían valores o principios declaratorios positivos y diversas restricciones o prohibiciones, especialmente relacionadas con las actividades en el sector privado. En la información se señalaban también ejemplos de la aplicación de los artículos 8 (Códigos de conducta para funcionarios públicos) y 9 (Contratación pública y gestión de la hacienda pública) de la Convención. El representante puso de relieve las diversas maneras en que se habían aplicado las normas sobre conflictos de intereses, por ejemplo, mediante medidas proactivas, la enajenación de activos y el recurso cada vez más frecuente a las autoridades centrales encargadas de la aplicación.

24. Con respecto a las declaraciones de activos, que se mencionan en el párrafo 5 del artículo 8 de la Convención, la Secretaría puso de relieve los temas comunes que habían surgido de la información suministrada. Entre estos figuraban la prevalencia de un órgano central e independiente encargado de supervisar el cumplimiento del requisito de presentar una declaración de activos y el creciente uso a esos efectos de instrumentos de tecnología de la información.

25. El experto de los Estados Unidos de América hizo una exposición sobre las medidas proactivas relacionadas con los conflictos de intereses y dio a conocer un documento que habían presentado los Estados Unidos titulado “El sistema de divulgación de información financiera del poder ejecutivo de los Estados Unidos” (CAC/COSP/WG.4/2012/CRP.2). Una de las medidas que se destacaron fue la utilización de un Acuerdo de ética entre los organismos y los funcionarios públicos en el que se exponían las medidas que se debían adoptar, tras la presentación de un formulario de declaración de activos, a fin de resolver todo posible conflicto de intereses antes de que el interesado comenzara a trabajar en el organismo público de que se tratara.

26. El experto de la Argentina presentó una ponencia sobre el sistema de divulgación financiera aplicable a los funcionarios públicos. Ese sistema se utilizaba para detectar tanto los conflictos de intereses como el enriquecimiento ilícito. Se prestaba especial atención al uso de la tecnología de la información para la presentación y tramitación de formularios de declaración de activos. Durante su ponencia el experto de la Argentina puso de relieve los problemas con que había tropezado su país al utilizar un sistema basado en documentos impresos para las declaraciones de activos e hizo notar las ventajas de adoptar un sistema automatizado, entre ellas la posibilidad de transmitir información con rapidez, el aumento de la seguridad y la eficiencia, el mayor acceso público a la información y la posibilidad de determinar con más rapidez los posibles conflictos de intereses. El experto resaltó también la utilización de un órgano centralizado para recibir y tramitar las declaraciones de activos.

27. El experto del Japón explicó las medidas proactivas que se habían adoptado en relación con los conflictos de intereses, basadas en información obtenida mediante cuestionarios rellenos por funcionarios públicos que, de forma demostrada, habían incumplido la reglamentación sobre los conflictos de intereses. Puso de relieve la importante función que podía tener la capacitación de los funcionarios públicos para determinar y resolver los conflictos de intereses. A ese respecto, las autoridades del Japón disponían de nuevos instrumentos de capacitación, como DVD de recapitulación e instrumentos de aprendizaje electrónico, que se utilizarían para capacitar a los funcionarios públicos. Se realizaban comparaciones entre distintos ministerios y organismos para motivarlos a mejorar las prácticas existentes de capacitación en materia de ética.

28. Los oradores señalaron con aprecio la documentación preparada y las ponencias presentadas por la Secretaría. Algunos observaron que había dificultades para examinar la cuestión de los conflictos de intereses y solicitaron ejemplos concretos y orientación que sirvieran para ayudar a los Estados en la preparación del segundo ciclo del Mecanismo de examen de la aplicación. Un orador señaló que tal vez la UNODC desearía colaborar con los Estados para elaborar algún tipo de marco o normas comunes en relación con los conflictos de intereses, que podrían consistir en una ley modelo o un marco reglamentario común.

29. Varios oradores consideraron que la adopción de códigos de conducta era una medida eficaz para hacer frente a los conflictos de intereses, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención (Códigos de conducta para los funcionarios públicos). Concretamente, varios oradores pusieron de relieve la elaboración de normas y códigos de conducta especializados aplicables en distintos ámbitos específicos de la administración pública.

30. Varios oradores se refirieron a las medidas adoptadas respecto de la contratación pública, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención (Contratación pública y gestión de la hacienda pública). Algunos pusieron de relieve que la contratación electrónica era un método eficaz para reducir las posibilidades de corrupción en el proceso de contratación pública. Un orador mencionó el sistema de contratación pública por vía electrónica CompraNet, señalando que desde su creación habían disminuido los costos de las adquisiciones y la cantidad de impugnaciones de las licitaciones.

31. Un orador destacó las iniciativas nacionales de reforma destinadas a simplificar el marco reglamentario y los procedimientos administrativos, con las que se habían reducido las posibilidades de corrupción y se habían logrado considerables economías de gastos.

32. Los oradores examinaron diversos enfoques en relación con las declaraciones de activos. Varios señalaron que únicamente los funcionarios superiores estaban obligados a realizar esas declaraciones. Otros se refirieron a una ampliación del alcance de esos requisitos, que podían aplicarse a todos los funcionarios públicos e incluso a los que trabajaban en el sector público en calidad de consultores. Algunos oradores señalaron que los familiares y los colaboradores estrechos también debían rellenar declaraciones de activos. Se convino en que era importante mejorar la comunicación entre los organismos gubernamentales (por ejemplo, las autoridades fiscales y las responsables de las declaraciones de activos) a fin de detectar posibles irregularidades. Un orador destacó también la necesidad de tener presentes los

activos en el extranjero y, en consecuencia, de colaborar con contrapartes internacionales.

33. Los oradores señalaron que existía una diferencia en cuanto a la utilización de las declaraciones de activos, pues estas podían limitarse a la detección de conflictos de intereses o ampliarse a fin de incluir el posible enriquecimiento ilícito. Varios oradores se refirieron a las sanciones aplicables cuando una persona no cumplía los requisitos de declaración de activos, que podían ser de carácter penal o administrativo. Un orador aludió al requisito suplementario de que los funcionarios públicos presentaran declaraciones de gastos además de declaraciones de activos.

34. Al examinar la segunda cuestión, relativa a la denuncia de los actos de corrupción, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 8 de la Convención, un representante de la Secretaría presentó una sinopsis de la información presentada por los Estados Miembros sobre sus experiencias y buenas prácticas. Se describieron diversas medidas, como la de establecer la obligación legal de denunciar los actos de corrupción, disposiciones proactivas para facilitar esa denuncia (como la creación de mecanismos centralizados y descentralizados y la realización de actividades de capacitación y sensibilización) y medidas de protección de los denunciantes, como las previstas en el artículo 33 de la Convención (Protección de los denunciantes). El representante señaló también que muchos de los instrumentos cuya existencia habían señalado los Estados estaban a disposición de los funcionarios públicos y de la ciudadanía, con lo que se contribuía a la aplicación del artículo 10 de la Convención (Información pública).

35. Un grupo de oradores presentó ponencias sobre las medidas y los sistemas para facilitar la presentación de denuncias de corrupción por funcionarios públicos a las autoridades correspondientes. El experto de Polonia describió la labor de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción, que conjugaba las actividades operacionales y de investigación con las iniciativas de prevención y educación. Señaló que se había publicado una Guía de lucha contra la corrupción para los funcionarios públicos, distribuida a las instituciones del Gobierno central y la administración local, así como al público en general. Además, Polonia había producido una Guía para los empresarios sobre la lucha contra la corrupción, destinada a miembros del sector privado que interactuaban con funcionarios públicos. Se habían impartido y seguían impartiendo cursos de capacitación para avanzar en la aplicación de esas guías. El experto señaló que todos los funcionarios públicos tenían la obligación de denunciar todo acto delictivo, incluso de corrupción, y que si no cumplían esa obligación podían ser objeto de acusaciones penales.

36. El experto del Ecuador informó de que en la Constitución de ese país aprobada en 2008 se incorporaba el principio fundamental de que los ciudadanos viven en una sociedad libre de corrupción y están obligados a denunciar todo acto de corrupción. Con arreglo a la Constitución, el Estado tenía otras responsabilidades relacionadas con la transparencia y la supervisión social. Se señaló que existía un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, integrado por representantes de organizaciones populares, que recibía e investigaba las denuncias de corrupción presentadas por los ciudadanos, amparados por el anonimato, y preparaba informes sobre posibles responsabilidades civiles o penales. Se describieron numerosas actividades de sensibilización pública, como campañas publicitarias, iniciativas de

divulgación, programas de capacitación y cursos de posgrado sobre administración pública en diversas universidades.

37. El experto de Francia señaló que, aunque el Código Penal imponía a los funcionarios públicos la obligación de denunciar todo delito, había una serie de dificultades a la hora de acusar a una persona de ayudar o incitar a cometer un delito relacionado con la corrupción por no haber comunicado información. Además, puso de relieve la importancia de la educación y la capacitación del público sobre las iniciativas contra la corrupción. Observó que aún no existía en Francia un mecanismo jurídico para proteger a los denunciantes del sector público. En lugar de ello, se había prestado más atención a los denunciantes del sector privado, por considerarse que se hallaban más expuestos a represalias y otras consecuencias negativas al denunciar actos de corrupción.

38. Varios oradores agradecieron la labor de la UNODC y el documento de antecedentes preparado por la Secretaría. Algunos señalaron la importancia de la obligación legal de los funcionarios públicos de denunciar todo acto de corrupción mediante un mecanismo establecido. Sin embargo, había enfoques diversos respecto del fundamento jurídico y la formulación de dicha obligación. Algunos Estados señalaron que existía la obligación general de denunciar todos los delitos, y otros subrayaron que se había establecido la obligación específica de denunciar los actos de corrupción. En el caso de los Estados en que se aplicaban disposiciones más generales, varios oradores señalaron que en ese momento se estaban estudiando reformas de la legislación orientadas a introducir obligaciones más específicas. Los oradores indicaron que los funcionarios públicos que no cumplieran la obligación de denunciar los actos de corrupción podían sufrir consecuencias legales de carácter penal o administrativo. Se subrayó que la falta de mecanismos adecuados de protección podía significar que algunos denunciantes se retractaran posteriormente. Además, un orador señaló el problema de la utilización de denuncias de corrupción falsas o maliciosas para perjudicar a superiores o adversarios políticos.

39. Los oradores señalaron diversos mecanismos que se utilizaban para facilitar la denuncia de los actos de corrupción. Entre ellos figuraban la creación de un órgano centralizado para recibir denuncias y la utilización de una serie de mecanismos, por ejemplo para recibir denuncias en persona o mediante línea telefónica directa, sitios web o SMS. Otros oradores señalaron las ventajas de disponer en ciertos contextos de un mecanismo descentralizado para recibir denuncias. Varios subrayaron también la relación entre las medidas orientadas a alentar las denuncias de actos de corrupción y las destinadas a proteger a los funcionarios públicos o ciudadanos que presentaran esas denuncias. Además, las medidas de protección servían para demostrar que se aplicaban los artículos 32 (Protección de testigos, peritos y víctimas) y 33 (Protección de los denunciantes) de la Convención. Otros oradores subrayaron la importancia de resguardar el anonimato de los denunciantes durante la investigación y las actuaciones judiciales. Algunos describieron prácticas conforme a las cuales se exigía a los denunciantes que se identificaran ante la autoridad correspondiente, pero se mantenía la confidencialidad. Un orador se refirió al programa de “usuarios secretos” existente en su país, con el que se promovía la participación ciudadana en la detección de actos de corrupción en la contratación pública.

40. Los oradores señalaron que se debían estudiar más a fondo las repercusiones de la obligación de denunciar en el sector privado. Varios indicaron que, conforme al artículo 13 de la Convención (Participación de la sociedad), los Estados debían lograr la participación del público en las iniciativas de lucha contra la corrupción y alentar la denuncia de esos actos por los ciudadanos, no solo por los funcionarios públicos. Se señaló que los medios de información podían constituir también una fuente de información para denunciar la corrupción tanto en el sector público como en el privado, además de ser un mecanismo útil en campañas de divulgación y sensibilización. Asimismo se puso de relieve la participación de las organizaciones cívicas en la denuncia de actos de corrupción. Un orador destacó que había incentivos para que el sector privado denunciara los actos de corrupción cometidos a nivel interno, a cambio de lo cual el Estado ofrecía reducciones de penas o de sanciones.

41. El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer las conclusiones de una serie de encuestas realizadas conjuntamente con el Gobierno de Viet Nam sobre el desempeño de los sectores de la administración pública y la gestión de los asuntos públicos. Señaló que esas encuestas revelaban que muchos ciudadanos no denunciaban los actos de corrupción por considerar que no se adoptaría ninguna medida al respecto. Otros obstáculos para las denuncias eran el temor a las represalias y la falta de información sobre los mecanismos de denuncia. Se obtuvieron resultados similares en cuanto a las denuncias de actos de corrupción en el sector privado.
